



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: ANACLETO VIDALES
DEMANDADO: CORREA GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A.S
RADICADO: 05088 31 05 001 2017 00994 01
ACTA N°: 06

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede a resolver el recurso de apelación de la demandada en el proceso promovido por el señor **ANACLETO VIDALES** en contra de **CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S**, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello finalizó la primera instancia.

A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el acta 06 de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

El demandante pretende que se declare que la relación laboral con CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S sigue vigente, que se condene al reconocimiento y pago de sendos créditos laborales desde 2014, se ordene pago de la indemnización por falta de pago oportuno de las cesantías según el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, entre otros; subsidiariamente se conceda el pago de los créditos laborales hasta el 30 de septiembre de 2016, indemnización por terminación sin justa causa del contrato laboral, indemnización del artículo 65 del CST y del art. 99 de la Ley 50 de 1990².

1.2. LA CONTESTACIÓN³

CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S. adujo que cumplió con sus obligaciones, entre ellas el pago de las cesantías; que actuó de buena fe pagando los aportes a seguridad social sin tenerlo que hacer. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como

¹ La demanda fue presentada el 6 de julio de 2018 –páginas 27 a 40 del **PDF 01** de primera instancia- sin embargo, con auto del 10 de julio de esa anualidad se inadmitió, siendo subsanada por el apoderado del actor con memorial que obra de páginas 139 a 143 del mismo documento.

² Con auto del 1 de agosto de 2018 se admitió la demanda y se ordenó la notificación de la sociedad demandada. Página 144 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia.

³ Páginas 196 a 202 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia.

excepciones de mérito las de PRECIPCIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, TEMERIDAD O MALA FE.

1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia del **18 de noviembre de 2021**⁴ el Juez decidió declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el **14 de abril de 2014** y el **30 de septiembre de 2016**, al ser esta última fecha en la que cesaron las cotizaciones a seguridad social. Condenó al empleador al pago de las prestaciones sociales al no hallar prueba de su pago, en valor de **\$3.334.788**, explicados así: **i)** Por concepto de **CESANTÍAS**, en valor de \$516.000 por el año 2014, \$718.350 por el año 2015 y \$575.366 por el 2016, para un total de **\$1.809.716**; **ii)** **INTERESES A LAS CESANTÍAS** por valor de \$46.400 en 2014, \$86.202 en 2015 y \$51.783 de 2016, que asciende al total de **\$137.985**; **iii)** Las **PRIMAS DE SERVICIO** del último año 2016 en cuantía de **\$575.366**; **iv)** Las **VACACIONES** \$231.000 en 2014, \$322.175 en 2015 y \$258.546 de 2016, que asciende al total de **\$811.721**.

En segundo término, por la consignación de cesantías entre 14 de abril de 2014 y el 30 de septiembre de 2016 al no hallar probado su pago ordenó la sanción contemplada en la Ley 50 de 1990 por valor de **\$12.246.103**, que explicó así: **i)** Para las cesantías del año 2014 la suma de **\$7.392.000**; **ii)** Para las de la siguiente anualidad la suma de **\$4.854.103**; **iii)** Agregó que las cesantías de 2016 debían ser canceladas al trabajador al término de la relación laboral, sin que hubiese lugar a esta indemnización.

En tercer lugar, invocando las facultades *ultra y extra petita* consideró que el actor era sujeto de especial protección constitucional en razón de su edad (75 años) y las prolongadas incapacidades médicas que lo ubicaban en estado de debilidad manifiesta, concluyendo en consecuencia que era acreedor de la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, otorgando la sanción de 180 días con base en el salario mínimo del año 2016 por valor de **\$3.971.256**.

Finalmente, ordenó la indexación desde el 1 de octubre de 2016 y hasta el pago. Declaró parcialmente probadas las excepciones de cobro de lo no debido y pago; absolviendo de las demás pretensiones.

1.4. RECURSO DE APELACIÓN DE LA DEMANDADA

Inconforme con la decisión, el apoderado de CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S interpuso recurso de apelación, insistiendo en que se probó el pago de las prestaciones sociales con los extractos bancarios del señor **ANACLETO VIDALES**. Sobre la condena a la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 solicitando la revocatoria porque hay

⁴ PDF 06 de la carpeta de primera instancia,

⁵ Documento 08 de PRIMERA INSTANCIA.

múltiples incongruencias y no se aportó certificado que lo haga acreedor de esa protección en los términos definidos por la Corte Suprema de Justicia.

2. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN ESTA INSTANCIA.

En esta instancia, con auto del **22 de febrero de 2022**⁶ se admitió el recurso y se corrió traslado a las partes, quienes se abstuvieron de intervenir.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación de la pasiva. Así, se analizará si en el proceso se demostró el pago total o parcial de las prestaciones sociales del demandante. Y si se acreditan los presupuestos para afirmar que en este caso existió una terminación del contrato en contravía de los mandatos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

3. EN EL PROCESO SE ACREDITA EL PARCIAL DE ALGUNAS PRESTACIONES SOCIALES

De acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, el actor pretende el pago de sendos créditos laborales que dejaron de ser reconocidos por el empleador como salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio y vacaciones.

El A quo concluyó que no hay prueba de que se hubiese efectuado el pago al actor de las CESANTÍAS, INTERESES A LAS CESANTÍAS y VACACIONES de toda la relación laboral, así como de las PRIMAS DE SERVICIOS del último año y en consecuencia ordenó su pago, además de la sanción por no consignación de cesantías.

Esta corporación aborda el estudio del acervo probatorio y encuentra las siguientes pruebas:

- Liquidaciones de prestaciones sociales de CORREA GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A.S, que tiene como base el salario mínimo de cada anualidad, en las que se expresa que “el trabajador no quiso firmar”:

Periodo laborado	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima de servicios	Vacaciones	Total liquidación
1 abril – 30 diciembre 2014 ⁷	Pagadas fondo de pensión: 0	Consignadas al empleado: 0	Consignadas al empleado: 0	\$231.000	\$231.000
1 enero - 30 diciembre 2015 ⁸	\$862.020	\$103.442	Consignadas al empleado: 0	\$322.175	\$1.287.637
1 enero - 30 septiembre 2016 ⁹	\$690.417	\$62.137	\$575.347	\$258.545	\$1.586.446

⁶ PDF 03 de la carpeta de segunda instancia.

⁷ Página 206 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; fechado del 30 de diciembre de 2014.

⁸ Página 219. Fechado del 30 de diciembre de 2015.

⁹ Página 236 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia. Del 30 de septiembre de 2016.

- Extractos bancarios de la cuenta de ahorros del demandante¹⁰ en los que se evidencian los pagos de nómina de enero a diciembre de 2014.
- Comprobante bancario de consignación por valor de \$171.997¹¹ del 5 de julio de 2014, que se registra manualmente como **PRIMA DE JUNIO DE 2014**.
- Estados de cuenta bancaria de la empresa por los meses de noviembre y diciembre de 2014 que reportan 4 pagos de \$264.469¹² y un pago adicional en diciembre por valor de 315.328¹³ que se reporta manualmente como **PRIMA DE DICIEMBRE DE 2014**.
- Soporte de planilla integrada de liquidación de pagos complementarios, de la consignación de **CESANTÍAS** del año 2014, con fecha del 16 de febrero de 2015¹⁴.
- Estados de cuenta bancaria de la empresa de enero a junio de 2015¹⁵, en los que se reportan dos pagos mensuales por valor de \$264.469 en enero y en adelante por valor de \$276.641¹⁶.
- Comprobante bancario de consignación por valor de \$443.568¹⁷ del 15 de julio de 2015, que se reporta manualmente como **PRIMA DE JUNIO DE 2015 e INTERESES A LAS CESANTÍAS DEL AÑO ANTERIOR**.
- Comprobante bancario de consignación por valor de \$329.243¹⁸ del 23 de diciembre de 2015, señalado manualmente como **PRIMA DE DICIEMBRE DE 2015**.

De los anteriores documentos se concluye con claridad que el empleador **probó el pago** de los siguientes conceptos: **i)** De la prima de servicios del primer semestre de 2014 por valor de \$171.997¹⁹ y del segundo semestre por valor de 315.328²⁰. **ii)** De las cesantías de abril a diciembre de 2014, en valor de \$516.000²¹. **iii)** De la prima de servicios del primer semestre de 2015 e intereses a las cesantías en valor de \$443.568²². **iv)** De la prima de servicios del segundo semestre de 2015 por valor de \$329.243²³

Así, el acervo probatorio lleva a la Sala a adoptar las siguientes determinaciones:

En **primer lugar**, se observa que contrario a lo definido en la providencia sí se probó el pago de las cesantías en el año 2014, siendo consignadas en el respectivo fondo, debiendo modificarse esta condena. Y sobre el pago de esta prestación por los años **2015 y 2016** se

¹⁰ Páginas 107 a 114 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia.

¹¹ Página 216 del PDF 01 de primera instancia.

¹² Páginas 209, 210, 211 y 212 del PDF 01 de primera instancia.

¹³ Página 207 del PDF 01 de primera instancia.

¹⁴ Página 242 del PDF 01 de primera instancia.

¹⁵ Páginas 213 a 231 del PDF 01 de primera instancia.

¹⁶ Salvo en pago del 1 de abril de esa anualidad que el valor reportado en la consignación fue de \$217.361 – página 228 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia.

¹⁷ Páginas 215 y 243 del PDF 01 de primera instancia.

¹⁸ Página 220 del PDF 01 de primera instancia.

¹⁹ Página 216 del PDF 01 de primera instancia.

²⁰ Página 207 del PDF 01 de primera instancia.

²¹ Página 242 del PDF 01 de primera instancia.

²² Páginas 215 y 243 del PDF 01 de primera instancia.

²³ Página 220 del PDF 01 de primera instancia.

evidencia que se efectuó la liquidación en las sumas de \$862.020 y \$690.417²⁴ respectivamente, pero no hay prueba que se hubiesen depositado en un Fondo de Cesantías o que se hubiesen cancelado directamente al trabajador.

En consecuencia, la suma a pagar por concepto de cesantías será MODIFICADA porque se solo se adeudan las siguientes: **\$718.350** por el año 2015 y **\$575.366** por el año 2016, para un **total de \$1.293.716** por esta prestación.

Y lo verificado impone modificar la sanción impuesta por la no consignación al fondo de cesantías. Al respecto, dispone el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que el **31 de diciembre de cada año** se hará la liquidación definitiva de cesantías, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. Y en el **numeral 3** se consagra, que el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. **El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.**

En este caso, por la no consignación de las cesantías a más tardar el 14 de febrero de 2016, debe calcularse la sanción entre el **15 de febrero** y el **30 de septiembre de 2016**, fecha de finalización del contrato, teniendo en cuenta el salario mínimo de esa anualidad por valor de \$689.455 mensuales. Así, se determina por la Sala que en este caso la sanción del artículo 99 de la ley 50 de 1990 asciende a **\$5.170.912**²⁵.

En **segundo lugar**, se halló en el expediente prueba del pago de los **intereses a las cesantías del año 2014**²⁶, quedando entonces la condena por este concepto en los siguientes términos: **\$86.202** por los intereses del año **2015** y **\$51.783** por los del **2016**, siendo un total de **\$137.940** lo adeudado por esta prestación, aspecto en el que se MODIFICARÁ la providencia

Ahora bien, respecto a los conceptos que se ordenan pagar (**Vacaciones de 2014, intereses a las cesantías y vacaciones de 2015; intereses a las cesantías, vacaciones y primas de servicios de 2016**) destaca la Sala que si bien hay prueba de que fueron liquidados por el empleador, no hay constancia del **PAGO** al señor **ANACLETO VIDALES**. Para la Sala resulta acertado el razonamiento del juez sobre este asunto, porque las liquidaciones aportadas²⁷ indican la cuantificación de los diferentes emolumentos, pero no

²⁴ Páginas 219 y 236 del PDF 01 de primera instancia.

²⁵ El día de salario equivale a \$22.982; entre el 15 de febrero al 30 de septiembre de 2016 hay 225 días. Multiplicando el valor del salario diario por 225 días, el valor corresponde a \$5.170.912.

²⁶ Páginas 215 y 243 del PDF 01 de primera instancia. INTERESES DE 2014 ERAN \$46.400 Y DE PRIMA \$359.175, PARA UN TOTAL DE \$405.575.

²⁷ Páginas 206, 219 y 236 del PDF 01 de primera instancia.

logran probar con suficiencia que el trabajador hubiese recibido el dinero en efectivo en los términos allí explicados o a través de consignaciones bancarias.

Tal como se ha indicado, en las tres liquidaciones se indica que *“el trabajador no quiso firmar”* y CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S no trajo al proceso otros medios de prueba para desvirtuar adecuadamente las afirmaciones del actor sobre el no pago de estos conceptos. En efecto, de acuerdo con las reglas de la carga de la prueba contenidas en el **artículo 167** del Código General del Proceso aplicable a las causas judiciales del trabajo y de la seguridad social, acorde con lo dispone el artículo 145 del estatuto de la materia-, las partes deben *“probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen”*.

En efecto, es principio universal en cuestión de la carga probatoria, que *“quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado”* (**Sentencia CSJ SL 21779, 22 abril 2004**).

Es así como desde la sentencia C-070 de 1993 la Corte Constitucional ha señalado que, en las controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acude al juez con su propia versión de los hechos. De esa manera, cuando hay una genuina contención, el sistema exige que cada uno de los contendientes correlativamente contribuya a que el juez supere el estado de ignorancia en el que se halla respecto de los hechos debatidos, tarea que por lo general concierne al demandante respecto de sus pretensiones, y al demandado respecto de las excepciones.

En síntesis, esta institución de las cargas probatorias pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, ***“las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes”***, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia **T-733 de 2013**.

Así, a partir de los anteriores presupuestos normativos y ante el incumplimiento de la carga probatoria de CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S. sobre el pago aludido a lo largo del proceso, debe CONFIRMARSE la condena por los conceptos de primas de servicios y vacaciones ordenadas en la providencia, pero con las MODIFICACIONES ya anunciadas a

los conceptos de cesantías, intereses a las cesantías y sanción por no consignación de las cesantías.

4. LA CONDENA A LA SANCIÓN DE 180 DÍAS DE SALARIO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997

Invocando las facultades *ultra y extra petita* consagradas en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, el Aquo condenó a CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S. al pago de la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por considerar que el actor **fue despedido** el 30 de septiembre de 2016 en estado de debilidad manifiesta.

Es en contra de esta determinación que la pasiva argumenta en su recurso que no hay prueba que acredite que el actor fuese beneficiario de esta protección foral en los términos tratados por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, buscando así que se REVOQUE esta condena.

Pues bien, para esta corporación es claro que conforme el precedente Constitucional la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende para quienes se encuentren en alguna de las siguientes categorías: **i)** en situación de invalidez; **ii)** en condición de discapacidad, calificados como tal conforme con las normas legales y reglamentarias; **iii)** en situación de disminución física, síquica o sensorial; o, en general, **iv)** todos aquellos que tengan una considerable afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores aun cuando no presenten una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su capacidad productiva²⁸.

Y de manera particular en la sentencia **T 434 de 2020** en la que analiza múltiples casos, la Alta Corporación explica que esta garantía de estabilidad ocupacional por motivos de salud se predica de todo individuo que presente una afectación en la misma, situación particular que puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse discriminada por ese solo hecho. Lo anterior, con independencia de la vinculación o de la relación laboral que la preceda²⁹. En términos generales comprende la prerrogativa para **el trabajador de permanecer en el empleo** y, por consiguiente, obtener los correspondientes beneficios salariales y

²⁸ **T-837 de 2014, T-597 de 2014, T-594 de 2015, T-368 de 2016, T-188 de 2017, T-443 de 2017, T-589 de 2017 y SU-049 de 2017**

²⁹ Conforme se indicó en la Sentencia SU-049 de 2017

prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique disponer su despido³⁰.

Sin embargo, debe señalarse que este fuero de estabilidad laboral reforzada encuentra su sustento en el contexto de **un despido discriminatorio**, siendo claro que el hecho del **DESPIDO** constituye un presupuesto básico para desplegar esta consecuencia, siendo claro entonces que éste debe encontrarse acreditado en el plenario, **siendo carga probatoria** en este proceso del señor **ANACLETO VIDALES**

En efecto, en la sentencia **SL 4632 de 2021** la Corte abordó el asunto explicando la carga probatoria de la activa de acreditar el despido y las circunstancias de discapacidad en cualquiera de sus grados, y de la pasiva a quien le incumbe demostrar que el despido obedeció a una causal objetiva; tras reiterar su jurisprudencia expuso:

Por ende, el trabajador debe demostrar que fue despedido y que se encontraba limitado en su salud en los grados previstos por el legislador, para que surja en su favor la protección legal, que conlleva a que sea el empleador quien deba probar que las razones invocadas para prescindir de los servicios del trabajador no fueron las concernientes a su limitación y, por consiguiente, ante esa situación acreditada, no se le podía exigir el agotamiento del permiso ministerial.

(Negrita intencional)

En igual sentido, en la sentencia **SL 2237 de 2021** la alta Corporación explicó:

Ahora bien, no sobra recordar que para efectos de reconocer la garantía de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo importante no es solo que el trabajador acredite una limitación moderada o superior, que repercuta en su capacidad laboral, **sino que aquella esté inexorablemente, ligada a la finalización de la relación laboral** (Ver Sentencias SL1360-2018, CSJ SL260-2019).

Frente a este último punto, debe la Sala indicar que aun, si en gracia de discusión, se aceptara la existencia del yerro fáctico invocado, lo cierto es que, en sede de instancia, esta Sala arribaría a igual conclusión que la del Tribunal, **sobre la improcedencia de la protección incoada, en tanto, dentro del plenario no se acreditó que hubiese existido despido de la actora y**, menos aún, originado en su estado de salud.

Al respecto es pertinente precisar, que aunque las partes fueron concurrentes en señalar que, la relación laboral finalizó el 30 de noviembre de 2009, **la trabajadora no demostró que se tratara de un despido por parte de las empleadoras, en tanto, no obra probanza que así lo confirme, como por ejemplo, con una carta de despido.**

Solo se allegó la liquidación de salarios y prestaciones sociales (fl. 51), suscrita por las partes para aquella fecha [...]

(Negrita intencional)

Pues bien, siendo entonces presupuesto normativo para imponer la sanción consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 el que se acredite en el plenario el hecho del despido, esta Corporación no encuentra probado en el proceso que el señor **ANACLETO VIDALES**

³⁰ Al respecto, se encuentran, entre muchas otras, las siguientes sentencias con las cuales se verifica que la estabilidad laboral garantiza la permanencia en el empleo y el consecuente pago de salarios y prestaciones: Sentencia C-470 de 1997, T-256 de 2016, T-638 de 2016, T-188 de 2017, T-151 de 2017 y T-305 de 2018.

hubiese sido despedido por **CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S.** el **30 de septiembre de 2016**

Verificada la demanda y las pretensiones que dieron origen a este proceso, se verifica que el señor **VIDALES** pretendía de manera principal que se declarara la vigencia de la relación laboral aún para la fecha de presentación de la demanda **-6 de julio de 2018-**, pues explicó que estuvo incapacitado por un largo período y que el empleador dejó de efectuarle los pagos correspondientes a salarios, prestaciones sociales y seguridad social, quedando pendiente un procedimiento médico que le fue negado por la EPS ante el retardo del empleador en el pago; indica que un día le fue retirado el carné de la empresa que lo acreditaba como trabajador.

A su turno, **CORREA GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S** en la contestación no efectuó confesión alguna relativa al despido del trabajador, expuso que siguió cumpliendo con sus obligaciones patronales como el pago de nómina y pagos a la seguridad social hasta que se remitió la solicitud ante la EPS y AFP; y que la empresa ya no ejercía su actividad laboral estando a la espera de liquidarse. Sobre el retiro del carné al trabajador, indicó que era falso y que debía probarse.

Revisado el acervo probatorio y sin que se hubiese practicado prueba testimonial, no aparece en el expediente documento alguno con el que se demuestre la terminación del contrato por parte de sociedad el 30 de septiembre de 2016 u en otra fecha. Y si bien al absolver el interrogatorio de parte el señor **ANACLETO VIDALES** manifestó que un día le fue retirado el carné de la empresa y se le indicó que “todo terminaba”, se trata de una afirmación sin respaldo probatorio alguno, siendo claro que por sí sola resulta insuficiente para demostrar el hecho del despido y que la parte no puede crear su propia prueba³¹.

Se insiste entonces por esta colegiatura que no se encuentra demostrado que el vínculo laboral que perduró entre las partes hubiese finalizado en virtud de una decisión unilateral de la pasiva, debiendo resaltar que **este hecho no se puede inferir** del cese de pagos de aportes a la seguridad social; por esta razón, siendo presupuestos de la procedencia de esta indemnización el despido al no bastar con la acreditación de las condiciones de salud del accionante se impone la REVOCATORIA de la condena por este concepto, debiéndose enfatizar en que con este panorama no se encuentran acreditados los presupuestos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico respecto a las facultades **extra y ultra petita** establecidas en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo de la de Seguridad Social, aspecto explicado en sentencias como la **CSJ SL2808-2018**, citada en la **SL 3850 -2020**:

³¹ Véase **SL 2273 de 2022**.

[...] El artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que: «el juez ~~de primera instancia~~ podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y **estén debidamente probados**, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas».

Así, la facultad extra petita -por fuera de lo pedido- requiere rigurosamente que los hechos que originan la decisión (i) hayan sido discutidos en el proceso, y (ii) **que estén debidamente acreditados, a fin de no quebrantar frontalmente los derechos constitucionales al debido proceso con violación de los derechos de defensa y contradicción de la llamada a juicio.**

Y por su parte, la ultra petita -más allá de lo solicitado- exige que la súplica impetrada en el escrito inicial, (i) sea inferior a la estatuida en la norma laboral, y que (ii) que no emerja del juicio que el mayor valor hubiese sido cancelado al trabajador acreedor.

Negrilla de la Sala

Finalmente, al haber salido avante el recurso de apelación interpuesto, no se causan costas en esta instancia (artículo 365 numeral 8 del CGP).

5. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE.**

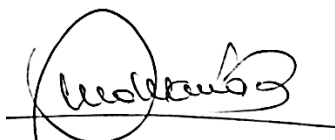
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello el pasado **21 de noviembre de 2021**, pero **MODIFICANDO** el **NUMERAL SEGUNDO** en relación con los siguientes conceptos y **conforme el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia:**

- La condena por concepto de CESANTÍAS corresponde a los años 2015 y 2016 por un valor total de **UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$1.293.716)**
- La condena por concepto de INTERESES A LAS CESANTÍAS corresponde a los años 2015 y 2016 valor total de **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$137.940).**
- La condena por concepto de SANCIÓN DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990 asciende a la suma de **CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (\$5.170.912)**
- Se **REVOCA** la condena al pago de la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

RADICADO: 050883105 001 2017 00994 01

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

RADICADO: 050883105 001 2017 00994 01



RADICADO: 050013105 001 2017 00994 01

SENTENCIA del //10/02/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EtoKERhfCcxLmHWHnhkWLFcBdthGxXSJhqTtjnMo72zkwQ?e=uk71T5